

de Circuito, y archívese á su vez el toca.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*José María Lafragua.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Abril diez y siete de mil ochocientos setenta y dos.—*Alejo Gomez Eguíarte.*

## AMPARO.

*De garantías promovido ante el juzgado de Distrito de Yucatan por los señores Ibarra, Dondé y compañía, contra la Tesorería general del Estado, que les cobró el derecho establecido por el decreto local de 12 de Enero de 1871, causado por el consumo de varios efectos extranjeros nacionalizados.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Si los fundamentos que el infrascrito expuso en su conclusion fiscal de 7 de Noviembre último, fueron bastantes en su concepto para pedir que se denegase á la sociedad de los señores Ibarra, Dondé y C<sup>a</sup> el amparo que tienen promovido en el curso que motiva este expediente, los que sirvieron de apoyo al auto de sobreseimiento que se dignó vd. proveer, y las razones que aduce la autoridad responsable en el nuevo informe que por vía de ampliacion del primero ha emitido en cumplimiento de lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia sobre este particular, para que vd. pronuncie sentencia definitiva concediendo ó negando el recurso intentado, hacen que el fiscal se afirme en el juicio de que el fallo debe negar el amparo, como pidió en su anterior dictámen. Porque en este informe se manifiesta, que solo á los efectos extranjeros nacionalizados en otros Estados se cobra el derecho que ocasiona la queja, infiriéndose de aquí que á los de la misma

especie que se produzcan en cualquiera otro del interior, es decir, á los nacionales, no se les cobra el propio derecho municipal sino el que establece el decreto de 13 de Enero de 1871, destinado á los fondos del II. ayuntamiento de esta capital; y porque los documentos que acompaña á la indicada ampliacion el ciudadano tesorero que la hace, recuerdan que los recursos que se han intentado contra las mismas exacciones, verificadas por el propio funcionario en virtud de la citada disposicion local de 12 de Enero de 1870, han sido resueltos negativamente por vd., habiendo merecido sus respectivos fallos la autorizada confirmacion de la Suprema Corte de Justicia. Pero ademas de estos fundamentos, que corroborean la opinion del infrascrito emitida en su pedimento de 7 de Noviembre próximo pasado, adopta como suyos en el presente los que apoyan al auto de sobreseimiento; pues estos son tan poderosos y legales, que bien pudieran haber servido para haber fallado desde entonces declarando que la justicia de la Union no ampara ni protege á la sociedad de los señores "Ibarra, Dondé y C<sup>a</sup>" del comercio de esta ciudad, contra los actos del ciudadano tesorero general del Estado, que les cobró el derecho establecido por el decreto local de 12 de Enero de 1871, que es el sentido en que el fiscal pide á vd. sentencie definitivamente en este juicio.

Mérida, Febrero diez y seis de mil ochocientos setenta y dos.—*P. Hijuelos.*

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

"Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan. Mérida, Febrero veintitres de mil ochocientos setenta y dos.

Visto este juicio de amparo promovido por la sociedad mercantil que gira bajo la razon social "Ibarra, Dondé y C<sup>a</sup>, de este comercio, contra actos del C. tesorero general del Estado, por el cobro del derecho

impuesto por decreto local de 12 de Enero de 1870, aplicado á ochenta y nueve cascos petrolco y dos aguarrras, efectos extranjeros nacionalizados y recibidos en 16 y 27 de Julio del año próximo pasado, por las canoas "Iola" y "Gloria," procedentes de Campeche, con cuyo cobro se alega que se invaden atribuciones federales. Visto el informe de la tesorería general del Estado; el pedimento fiscal; las pruebas rendidas; lo alegado para definitiva por la parte quejosa; la citacion para sentencia; el auto de sobrescimiento de 6 de Diciembre último; el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia nacional, para que con ampliacion del informe de la tesorería del Estado se falle, concediendo ó negando el amparo; el pedimento fiscal; la citacion para sentencia, con lo alegado por la parte quejosa y todo lo demas que de hecho y de derecho ver y tener presente convino.

Considerando: que aun cuando los mentados efectos al ser importados del extranjero hayan pagado sus respectivos derechos aduanales en la oficina de Campeche, quedando nacionalizados por este hecho, no por eso se les puede comprender en la ley de 2 de Mayo de 1868, porque esta ley se refiere expresamente á frutos propios de los Estados, segun su tenor literal, que dice: *Ningun Estado puede imponer bajo ninguna denominacion á los frutos de los otros Estados, mayores contribuciones que las que exija á sus propios frutos.* Que esta prerogativa es solo de los efectos nacionales como proteccion la industria y comercio de los Estados entre sí, en cumplimiento de la garantía ofrecida en el artículo 72, cláusula 9ª de la Constitucion: prerogativa que no puede extenderse á frutos que no han producido los Estados mexicanos sino que son originarios de país extranjero. Que tampoco puede decirse que por interpretacion extensiva se puede aplicar la citada ley de 2 de Mayo á los referidos efectos, porque la interpretacion que se hiciese equivalaria á modificar la ley,

siendo claras y terminantes sus palabras; de suerte, que no hay duda en su aplicacion ni cabe interpretacion, estando el presente caso fuera del círculo de su accion; y advirtiendo nada mas que si alguna interpretacion cupiese, seria auténtica y ésta toca al legislador hacerla y no al juez. Que no se puede alegar que el derecho que se cobra sea un recargo á la importacion extranjera, porque no se han traído los efectos de puerto extranjero ni se les han cobrado derechos de importacion; y por lo mismo, aunque el impuesto que motiva este juicio sea general del Estado, como lo es, y no municipal, tampoco se ha faltado con él á la fraccion 1ª, art. 112 constitucional, porque la prohibicion que establece esta para los Estados de no poder imponer contribuciones ó derechos sobre las importaciones sin consentimiento del Congreso de la Union, se contrae al comercio extranjero y no al de Estado á Estado. *Se trata de la importacion y exportacion, y no del comercio interior.* Historia del Congreso constituyente por Zarco, tomo 2º pág. 522. Que el impuesto porque se pide amparo, no es contra la importacion extranjera, puesto que los efectos extranjeros importados en este Estado, no lo pagan, ni contra el comercio de efectos nacionales, porque estos igualmente no lo pagan, gravitando sobre los nacionalizados, tan solo, de cualquier Estado que vengan, cuyo impuesto es un medio buscado, salvando los preceptos constitucionales, para evitar la ruina del comercio extranjero ó de importacion, y por consiguiente la de las rentas federales en esta localidad, medio permitido por el art. 117 de la propia Constitucion. Por lo expuesto, de conformidad con el pedimento fiscal y arreglado á la ley suprema de 20 de Enero de 1869, la autoridad falla:

Primero; la justicia de la Union no ampara ni protege á la sociedad "Ibarra, Dondé y Cª" contra el tesorero del Estado que le cobra el impuesto establecido por decreto de 12 de Enero de 1870, causado

por ochenta y nueve cascos petróleo y dos aguaras, procedentes de Campeche.

Segundo; sáquese testimonio de este fallo para su publicacion, y elévense los autos á la Corte Suprema de Justicia nacional para su revision, conforme á los artículos 13 y 27 de la citada ley de 20 de Enero. Hágase saber.—*I. Manzanilla.*—Ante mí.—*José Anacleto Castillo.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Abril tres de mil ochocientos setenta y dos.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Mérida por los señores Ibarra Dondé y C<sup>ta</sup>, contra los procedimientos del tesorero general del Estado quien les cobra el derecho municipal impuesto por decreto local del 12 de Enero de 1870 por el consumo de 89 frascos de petróleo y dos de aguaras, efectos extranjeros nacionalizados y recibidos en 16 y 27 de Julio del año de 1871 en las canoas "Lola y Gloria" procedentes de Campeche, alegando que con este hecho se invaden las atribuciones federales, contraviniendo á lo expresamente dispuesto en la ley de 19 de Mayo de 1868.

Vistas las constancias de autos y

Considerando: que aun cuando los Estados de la federacion en uso de su soberanía, pueden dictar leyes para su régimen interior, tienen que sujetarse á las prevenciones de la Constitucion; que segun aparece del informe de la autoridad contra quien se solicita el amparo, la contribucion impuesta por el decreto de 12 de Enero de 1870, no se aplica á los efectos propios de los Estados ni á los que se importan en el puerto del Progreso: esta excepcion en los efectos nacionalizados en los puertos de otros Estados, trae un recargo á la importacion extraneja; que no puede decretarse

por el gobierno de los Estados sin consentimiento del Congreso general, segun las prevenciones de la fraccion 1<sup>a</sup> del art. 112 de la carta federal de la República. Con tales fundamentos se decreta que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el juzgado de Distrito de Mérida, que negó el amparo á los peticionarios y se declara: que "la justicia de la Union ampara y protege á los señores Ibarra, Dondé y C<sup>ta</sup>, contra los actos del tesorero general del Estado que les cobra el impuesto establecido por decreto local de 12 de Enero de 1870, causado por 89 frascos de petróleo y dos de aguaras procedentes de Campeche.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden, con copia certificada de este fallo para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así lo mandaron por mayoría de votos, los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Aza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Abril cuatro de mil ochocientos setenta y dos.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Sonora por D. Walterio W. Symon, en representacion de su hermano D. Roberto, socio director de la casa de moneda de Hermosillo, contra el despojo que dice, le han hecho, de una parte de dicha casa de quien se titulan propietarios.*

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR

FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El promotor fiscal que suscribe, como el